

Perú. El golpe y los problemas de la transición a la democracia

Balbi, Carmen Rosa

Carmen Rosa Balbi: socióloga peruana. Investigadora de DESCO y profesora del posgrado de Sociología de la Universidad Católica, Lima.

A más de cien días del auto golpe de Estado del presidente Alberto Fujimori, realizado con un alto consenso de la población, y cerrados dos años de su mandato el último 28 de julio donde confirmó la convocatoria a un Congreso Constituyente acordado con la OEA, la situación peruana está lejos de encontrarse estabilizada.

El mensaje presidencial de ese día, en medio de serias tensiones con los militares, más que proponer reglas claras para un funcionamiento que garantice el retorno a la democracia, generó el rechazo de los partidos políticos que encarnan la oposición y reclaman reglas claras para ese fin. De otro lado, la dura ofensiva terrorista del grupo maoísta Sendero Luminoso ha erosionado el masivo apoyo inicial de la población al golpe.

La noche del 5 de abril de 1992 el presidente Alberto Fujimori, con el apoyo de las Fuerzas Armadas que tomaron el control de la ciudad, anunció al país la disolución del Parlamento Nacional, la reorganización del Poder Judicial y la Administración de Justicia, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Tribunal de Garantías Constitucionales y de la Fiscalía General de la Nación. Así como también la reestructuración de la Contraloría General de la República y la disolución de las Asambleas Regionales y finalmente la suspensión de la Constitución vigente.

Los partidos políticos, al igual que las instituciones de la democracia, fueron duramente atacados en su mensaje por «actuar con el único interés de bloquear las medidas económicas que conducen al saneamiento de la situación de bancarrota»; porque «impide continuar avanzando por la senda de la reconstrucción nacional y el progreso», siendo «la descomposición de esa institucionalidad vigente», sinónimo de «caos y corrupción... Trabando la acción del gobierno orientado al desarrollo nacional... materializados en la reinserción en el sistema financiero internacional y el paulatino control de la hiperinflación».

El otro punto importante era el señalamiento de los obstáculos que suponía dicha institucionalidad para acabar con la subversión y el terrorismo cada vez más amenazantes para una población crecientemente atemorizada e indefensa frente al terror. Donde el conjunto de medidas anunciadas permitiría el establecimiento, en un plazo no determinado, de una democracia legítima y efectiva. Anunció para ello el nombramiento de una «Comisión de Notables» a los efectos de reformar la Constitución en plazo no determinado y llamar a un plebiscito¹.

Para ese momento sin embargo los entrapamientos intrínsecos al programa económico de liberalización mostraban cada vez más claramente sus límites para estabilizar la economía y retomar el crecimiento, para lo cual la reinserción en el sistema financiero internacional y la inversión externa eran sus llaves maestras.

Los principales indicadores así lo señalaban. La inflación no estaba dominada; la reinserción financiera no exhibía los resultados esperados, pues en lugar de saldos positivos habían salido del país más de 700 millones de dólares para cumplir con los pagos pactados con el FMI y los organismos internacionales. La reducción drástica del gasto público y de la liquidez llevaron a un estrangulamiento de la producción, caída del empleo, cierre y quiebra de empresas y disminución ostensible del flujo de inversión. Y la sostenida subvaluación del dólar por la recesión y el narcotráfico impedía cualquier impulso a un modelo exportador. La recesión era cada vez más brusca sin haberse logrado los objetivos del programa de estabilización.

Como llama la atención Alberto Adrianzen, la teoría de la «partidocracia» guarda también relación con el ajuste estructural neoliberal. Citando a Echegaray y Raimondo, «la natural consecuencia de la política de ajustes es la reducción de los espacios de encuentro público, la del cierre o clausura de los canales de participación y/o agregación de reclamos y protestas. Por lo tanto, la crítica a la 'partidocracia' y a la institución parlamentaria se inscribe dentro de los patrones funcionales de la ideología del ajuste»².

En materia de política antiterrorista al momento del golpe, se seguía sin manejar una estrategia que enfrentara de manera integral y más eficaz los avances del terrorismo. A pesar de sucesivos golpes recibidos por las organizaciones terroristas, su presencia seguía aumentando de manera importante en las zonas periféricas de Lima³.

¹Mensaje a la nación del presidente Fujimori el 5 de abril de 1992.

²Alberto Adrianzen: «Crisis institucional y legitimidad», mimeo, julio 1992.

³Sobre la presencia subversiva en Lima, ver al respecto la revista Quehacer, N° 76.

Las razones del apoyo popular

La primera cuestión a analizar en la dinámica desatada por la ruptura del orden constitucional es sin duda el apoyo masivo de la población en contraste con la unánime condena latinoamericana e internacional: las encuestas de opinión recogieron entre un 80 y un 84% de apoyo en los diferentes estratos sociales.

¿Qué explica que luego de cierta consolidación de una cultura democrática en un contexto político como el peruano, marcado además por el terrorismo⁴, la concentración de poderes en el Ejecutivo encuentre de pronto una entusiasta y al mismo tiempo pasiva aceptación?

Este hecho se ha alimentado en primer lugar de la erosionada legitimidad democrática: casi doce años de democracia representativa resultaron decepcionantes para las grandes mayorías. Si bien pudieron recuperar sus espacios de movilización y de protesta, vieron empeorar a lo largo de los años democráticos sus condiciones de vida a niveles insospechados⁵; paradójicamente con una nueva Constitución (1980) que en la letra garantizaba nuevos derechos sociales básicos para las mayorías.

Simultáneamente, las instituciones de aquella democracia no lograron alcanzar una legitimidad indispensable para su funcionamiento; en ellas se percibieron más bien como constantes del sistema político su ineficiencia y la corrupción extendidas en el aparato estatal y la administración pública. En ese sentido, las encuestas de opinión, que corroboraban periódicamente el descrédito del Parlamento y el Poder Judicial, dan bases para entender la adhesión entusiasta a la reforma institucional que el golpe proponía.

El solo restablecimiento de las instituciones no supuso su funcionamiento democrático en el mediano plazo, y partimos de la convicción de que la sobrevivencia de aquéllas se relaciona estrechamente no sólo a la eficacia de su gestión sino también a la consolidación de una cierta cultura política que opere como racionalizador permanente. Como nos lo recuerda Weffort, cuando hablamos de legitimidad política

⁴Julio Cotler: «Los partidos políticos y la democracia en el Perú» en Pasara y Parodi (eds.): Democracia, Sociedad y gobierno en el Perú. Existe además un trabajo de W. Alarcón sobre cambios en la cultura popular realizado en barrios populares y Pueblos Jóvenes que muestra la existencia de una cultura democrático- representativa que - aunque no exenta de componentes autoritarios -, se gesta en la conciencia popular con los cambios en la década del 70. Y la ruptura y cancelación del orden oligárquico: «Clases populares, cultura política y democracia» en Socialismo y participación N° 54.

⁵Los salarios sólo son hoy la mitad que en 1985 y apenas un tercio de lo que eran en 1975. El desempleo se duplicó en la década y el subempleo por ingresos abarca al 85% de la PEA.

mencionamos en primer lugar la existencia no sólo de reglas y procedimientos sino de «creencias, normas, y valores que plasman el espacio de las acciones y de las relaciones sociales, éstas siempre ligadas a la noción de una reciprocidad de sentido entre los actores».

Intentamos con estas reflexiones hacer más comprensible la aparente paradoja de la actual situación: lo sucedido el 5 de abril expresa vastos y profundos procesos que venían incubándose en la conciencia popular acerca del régimen democrático representativo, todos los cuales estaban concurrendo a la erosión de la cultura democrática que, - a pesar de la subversión y su extensión - se gestaba en el país. Sin embargo, la masiva adhesión popular al golpe de Fujimori, con el alto contenido autoritario que porta, resultaría, paradójicamente, de la expectativa de reconstruir - o construir - una institucionalidad democrática que funcione⁶.

Hay además otros procesos a tomar en cuenta. La compleja constitución del liderazgo de Fujimori en las elecciones de 1990 - no suficientemente analizada - nos parece fundamental para explicar los comportamientos descritos. Dicho liderazgo se gestó no sólo a partir del desprestigio del sistema de partidos como canalizador de las demandas populares⁷, sino también de fuertes identidades étnico-culturales. En un clima electoral de polarización y racismo nunca vistos, el candidato nisei encarna el mito del progreso y la modernidad «chola» en oposición a la modernidad percibida como excluyente que representaba Mario Vargas Llosa⁸.

Es relevante mencionar que con el triunfo de Fujimori se implementa a partir del 8 de agosto del 90 uno de los programas de ajuste más duros del que se tenga noticia en el contexto de una política neoliberal, con 70% de apoyo de la población. En este clima, fracasan dos paros nacionales y sucesivas medidas de fuerza del sindicalismo y fuerzas políticas de oposición contra el llamado «fujishock».

No está de más decir que la opción popular a aceptar los costos del ajuste se fraguó en el fracaso del populismo aprista. Pero resulta decisivo también, para entender dicha opción, el contexto de fragmentación y el atomización de la acción colectiva y el bajo grado de movilización social de una sociedad civil con un tejido altamente

⁶ Es ilustrativo lo registrado en el sondeo de una compañía de encuestas días después del golpe en torno a las acciones que debe tomar Fujimori y que reflejan demandas, prioridades y expectativas de la población en dicho golpe. Los mayores porcentajes se centran en moralizar al país (11.7%) reorganizar/retomar los poderes del Estado/Poder Judicial (11,2%) donde la opción de mejorar salarios sólo concita a un porcentaje muy minoritario (3.0%)

⁷V. al respecto Romeo Grampone: El velero en el viento, IEP, Lima, 1991.

⁸ V. C. Iván Degregori: Elecciones 1990: Demonios y redentores en el nuevo Perú, IEP, Lima, 1991.

debilitado que, como lo ha analizado Tironi⁹, el neoliberalismo y los programas de ajuste no hacen sino alimentar. Y que, en el caso peruano, se ve agudizado por la presencia del terror y la desintegración que parecen amenazar hoy al país.

Zermeño¹⁰ ha señalado cómo esta situación de desorden y atomización, producto de la crisis de progreso aunada a las políticas neoliberales, ha provocado en América Latina una fuerte desorganización social, un abatimiento en el horizonte del quehacer político, creando condiciones para «la fascinación del líder», el regreso de los grandes liderazgos popular-nacionales.

Lo ocurrido en el Perú en los últimos cuatro meses es ciertamente el tránsito de la erosión de una cultura democrática a la fe en un líder que canaliza odios, frustraciones y hartazgos de la política y los políticos, los cuales, según el sentido común popular, resultan cómplices de aquello considerado como los males profundos de la sociedad: corrupción, ineficacia, ocio, ineptitud, que están en el origen de la violencia, el terror, la descomposición de una sociedad al garete que carece a su vez de valores que sustenten la integración nacional.

Esto explica cómo hasta hoy la apelación a recuperar valores morales, a la lucha contra la corrupción generalizada, a la eficiencia y el trabajo esforzado - reafirmado en el mensaje del aniversario patrio por el presidente Fujimori - resulte efectivo para cohesionar un respaldo popular a pesar de los duros efectos del programa económico neoliberal en marcha.

Se puede entender entonces que la oposición a aspectos cruciales - aunque desarticulados - de la política económica neoliberal que realizara el Parlamento (la exigencia de una ley de emergencia agraria: el financiamiento de programas de alimentación popular; la oposición a la liberalización de las tarifas de transporte público y otras iniciativas parlamentarias), fuera dominada por un sentido común, trabajado por el Ejecutivo, que sorprendentemente percibía en la oposición política - en particular del Apra y de Alan García -, a iniciativas del liberalismo, un «bloqueo» y una «conjura» contra el programa de gobierno que ofrecía sacarnos adelante por medio de la ansiada reinserción económica, como lo expresó Fujimori el 5 de abril. Que hay un triunfo de la deformación ideológica de la realidad social en la mente de los individuos, sin duda. Pero ha sido mayor, dentro del panorama político, la erosión de la credibilidad y legitimidad y la pérdida de autoridad moral de la oposición.

⁹V. E. Tironi: «Los actores sociales y las políticas de ajuste» en Revista de la CEPAL No. 53.

¹⁰S. Zermeño: «El regreso del líder, crisis, neoliberalismo y desorden» en Revista mexicana de Sociología.

Equilibrio precario

No han sido la rearticulación de una oposición de los partidos que se aglutinó vigorosa, después del golpe, en torno al vicepresidente Máximo San Román, ni el modo y los estilos del ejercicio arbitrario cotidiano del poder dictatorial y su improvisado manejo, ni la violación persistente de la Constitución y el cercenamiento de garantías civiles básicas (por medio de normas que recortan derechos como el hábeas corpus o el recurso de amparo), ni una dudosa y arbitraria reorganización del Poder Judicial o los oscuros manejos que ostensiblemente están presentes en un acelerado proceso de privatizaciones - todo ello denunciado insistentemente por los medios de comunicación -, ni los arrestos de un populismo grosero, ni la represión arbitraria de la oposición y la detención de quienes representan a aquélla (caso de dirigentes del partido aprista), ni la omnipotente presencia de una Fuerza Armada, o las marchas y contramarchas por retornar a la institucionalidad democrática - expresada en casi una decena de cronogramas distintos - las circunstancias que han reducido de manera sustancial la adhesión obtenida por el nuevo dictador.

Aunque la angustia económica parece que no podrá paliarse con la esperanza de créditos ni de inversiones extranjeras, el desprestigio y el descrédito de la oposición política y la disposición a pagar los costos del ajuste percibidos como indispensables, llevan a que éste se implemente, como lo registran las encuestas, todavía con amplio apoyo de la población.

Según diversas encuestas (cuadro 1), la erosión del apoyo popular a Fujimori - que lo regresa a un 60% anterior - se hace manifiesta a fines de junio con el recrudecimiento de la ofensiva terrorista y la sensación de desamparo frente al terror. El estallido de poderosos coches-bomba con más de 500 kilos de dinamita en lugares estratégicos de la ciudad, (incluida la total destrucción de una estación de TV, el incendio de varias fábricas de importancia, la virtual demolición de múltiples comisarías policiales en extensas zonas populares y el inicio de una ofensiva de Sendero Luminoso con el uso del terror indiscriminado sobre población civil - por primera vez en barrios de clase media alta causando decenas de muertos, el ataque simultáneo de comisarías con pelotones altamente organizados y la realización de los llamados «paros armados» en Lima y el interior, con la novedad de una plataforma reivindicativa difundida en los barrios populares, mostraron que una nueva ofensiva - hasta ahora la más exitosa de SL -, estaba en marcha. En su esquema significa

consolidar el llamado «equilibrio estratégico» y la preparación para la insurrección urbana¹¹.

Polarizada la lucha política en una situación de guerra entre el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y SL, éste apunta directamente a frustrar cualquier posibilidad de nuevas inversiones anunciadas persistentemente por Fujimori como eje del programa económico¹².

Una población atenzada por el temor se percató prontamente no sólo de la ineficacia e inutilidad del toque de queda implantado; al mismo tiempo constataba que la esperada «mano dura» de los militares - exentos ya de "obstáculos institucionales" -, resultaba ser una ilusión para acabar con el terrorismo. Un esperado mensaje del presidente Fujimori acentuaba sin embargo el énfasis en medidas represivas: el incremento de las penas por terrorismo, el anuncio de la pena de muerte, el juzgamiento de acusados de terrorismo por tribunales militares y el anuncio de operaciones de rastillaje en zonas populares como toda respuesta.

Esto ha afectado una de las expectativas fundamentales de la ruptura institucional: la seguridad ciudadana frente a la extensión del terrorismo. En este sentido el mensaje presidencial del 28 de julio estuvo lejos de constituirse en un llamado a la continuidad del diálogo para el restablecimiento de la democracia y una concertación contra el terrorismo para trazar una política anti-subversiva que ahora no existe.

El mayor desacuerdo de la población frente al gobierno de Fujimori hoy está referido al manejo de la política antisubversiva (cuadro 2). Pero no puede subvalorarse el hecho de que por ahora Fujimori y el gobierno cuentan con un significativo 60% de apoyo de la población, mayor en los sectores de menores ingresos.

En realidad la mayor presión para la vuelta a la democracia proviene del compromiso asumido por el gobierno - bajo influjo de la OEA y la comunidad financiera internacional - de instalar el 22 de noviembre una Asamblea Constituyente autónoma que restaure la democracia representativa, el equilibrio de poderes, la vigencia de los partidos y el respeto a las garantías constitucionales. Esto ciertamente le ha complicado el panorama a Fujimori: hasta no producirse dicho evento, la ayuda ex-

¹¹ En las metas trazadas por SL el objetivo es alcanzar la etapa de ofensiva estratégica en la que se inserta la toma del poder, y donde Lima es el escenario privilegiado de lucha.

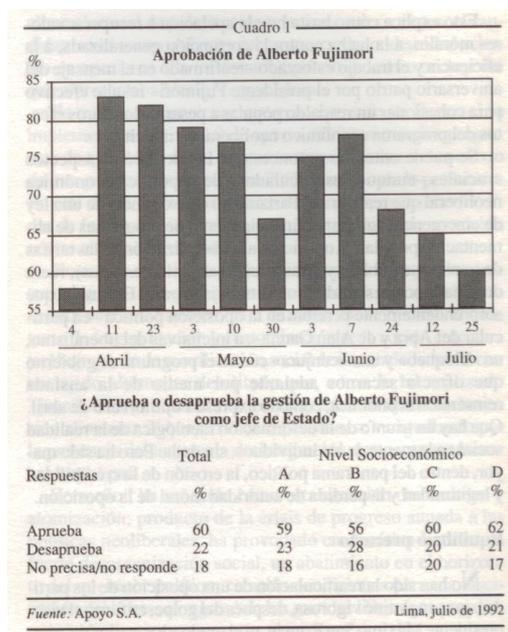
¹² Por primera vez el ministro de Economía señaló hace unas semanas, en una ostensible inversión de prioridades, que «el problema principal de nuestra economía es el terrorismo y si no se resuelve, la reinsertión intemacional y el programa de estabilización no darán sus frutos».

terna en todas sus modalidades - salvo la ayuda humanitaria - ha quedado suspendida según lo expresó el representante norteamericano en la OEA.

Esto significa afectar el pilar fundamental de su programa económico y de las promesas del 5 de abril: la reinserción en el ámbito de los organismos financieros y la cooperación internacional - Japón incluido - que permitirían retomar el crecimiento y el progreso. Sin esto aquél no tiene viabilidad alguna.¹³

Tensiones y escenarios posibles

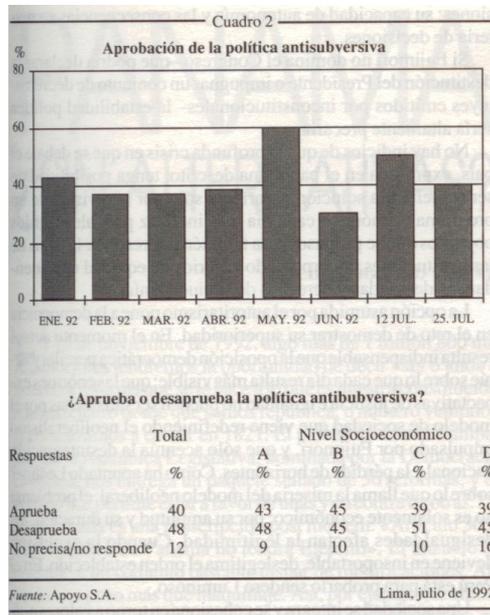
En este panorama se han desatado nuevas tensiones derivadas del golpe que complican el peligroso juego echado a andar por Fujimori. Resulta ya manifiesta una pública impaciencia de los agentes productivos y una presión cada vez mayor de los gremios empresariales, entusiastas iniciales del autogolpe. Las frías cifras



muestran una profundización de la recesión en los últimos cuatro meses y un sombrío panorama económico que el programa en marcha no parece sino agudizar; los

¹³En ese sentido el reciente viaje del ministro de Economía a Estados Unidos le ha servido sólo para constatar la negativa de los organismos de la banca multilateral a retomar la ayuda suspendida por el golpe.

empresarios exigen modificaciones en la política económica y un cambio de orientación de la misma.



Pero las tensiones más graves se presentan hoy entre las Fuerzas Armadas. Soportes institucionales del golpe, muestran ahora cierto descontento - y lo expresan abiertamente - ante la austeridad impuesta por la ortodoxia monetarista cuando ven en la expansión del terrorismo un problema de seguridad nacional¹⁴. Bajos sueldos, falta de apertrechamiento logístico y el retorno de una institucionalidad democrática que reinstale aquello de lo cual Fujimori liberó a las Fuerzas Armadas para ser garantes del autogolpe - incómodas fiscalizaciones en materia de derechos humanos -, dibujan hoy un posible escenario rumoreado persistentemente e impulsado por el ex-presidente Belaúnde y un sector de la oposición: un golpe de Estado para deponer a Fujimori y entregar el mando a una junta militar con el compromiso de llamar a elecciones. Aunque no puede excluirse la eventual tentación de permanecer en el poder para instaurar una dictadura castrense que podría asegurar los recursos demandados por las Fuerzas Armadas para acabar con el terrorismo y que se justifican en razones de seguridad nacional.

¹⁴Como lo resumió en un diario un general del ejército: «Las Fuerzas Armadas necesitan equiparse para recuperar su capacidad operativa y el personal necesita que se atienda su situación económica para garantizar su moral. Sin equipamiento y sin moral e incursionando en política, las Fuerzas Armadas están sobre el camino que intenta disolverlas».

Otra posibilidad es sin duda que la población comience a plantearse que el golpe y la disolución del Congreso no han traído ningún cambio sustancial en su situación económica (luego del golpe una encuesta reveló que un 60% opinaba que la situación económica iba a mejorar mientras que casi un 59% revelaba que Fujimori podría solucionar la crisis económica).

En el contexto de la grave situación nacional derivada del impacto del accionar subversivo, los partidos políticos han encontrado, sólo en las últimas semanas, terreno mejor abonado para que la sociedad tome en cuenta sus acciones. Luego de un período de desorden y parálisis, han retomado la iniciativa rechazando la oposición de Fujimori sobre los términos de convocatoria propuestos para la realización del Congreso Constituyente. La oposición política, en un acuerdo de partidos, viene exigiendo de Fujimori la concreción del diálogo asumido con la OEA y reglas claras sobre mecanismos y procedimientos para la instalación de aquel.

Este diálogo, no deseado por Fujimori, quien ve en los partidos y la institucionalidad democrática una traba para la implementación del programa neoliberal, es a la vez entendido como condición indispensable para romper con el aislamiento internacional en materia de reinserción financiera y ayuda externa¹⁵.

Esta es la razón, y ninguna otra, para que, aunque atravesando todavía un largo y tortuoso camino, el curso más probable de los acontecimientos sea finalmente la instalación del llamado Congreso Constituyente democrático en torno al cual girarán las nuevas tensiones: su capacidad de autonomía y las consecuencias en materia de decisiones.

Si Fujimori no domina el Congreso - que podría declarar la destitución del Presidente o impugnar un conjunto de decretos leyes emitidos por inconstitucionales - la estabilidad política sería altamente precaria.

No hay indicios de que la profunda crisis en que se debate el país, expresada en el panorama descrito, tenga posibilidad de ser resuelta. La solución pasaría no sólo por la revisión de un programa económico cada día más ineficaz para alcanzar los objetivos que se propuso; pasa también por resolver la crisis de las instituciones, incorporando criterios de equidad que atiendan las demandas y derechos de la ciudadanía.

¹⁵Su rechazo a formas de diálogo real y concertación lo expresó con la siguiente frase: «Yo no estoy para hacer ese tipo de relaciones públicas que llaman Acuerdo Nacional» (Mensaje del 28 de julio a la Nación).

La opción asumida por el autoritarismo pone a la democracia en el reto de demostrar su superioridad. En el momento actual resulta indispensable que la oposición democrática perciba y actúe sobre lo que cada día resulta más visible: que las enormes expectativas de justicia e igualdad no pueden ser satisfechas por el modelo de sociedad que viene redefiniendo el neoliberalismo impulsado por Fujimori, y que sólo acentúa la desintegración nacional y la pérdida de horizontes. Como ha apuntado Lechner sobre lo que llama la miseria del modelo neoliberal, el problema no es solamente económico: por su amplitud y su duración, las desigualdades afectan la legitimidad. Cuando la exclusión deviene en insoportable, deslegitima el orden establecido. En el Perú está para probarlo sendero Luminoso.

Una sociedad se integra y se cohesionan en torno a valores normas y creencias, y la legitimidad de un régimen político se juega en el acuerdo que haya alrededor de ellos. De seguir el país sin tomar en cuenta que el Estado debe constituirse en garante de derechos básicos de las mayorías consignados en la Constitución, la violencia - todo parece indicarlo así - seguirá expandiéndose y puede llegar a aparecer como la única opción posible.

Referencias

- *Alberto Adrianzen, CRISIS INSTITUCIONAL Y LEGITIMIDAD. - 1992; Pasara; Parodi -- Los partidos políticos y la democracia en el Perú.
- *Anónimo, QUEHACER. 76 - Sin año de publicación; Clases populares, cultura política y democracia.
- *Cotler, Julio, DEMOCRACIA, SOCIEDAD Y GOBIERNO EN EL PERU. - Sin año de publicación; Los actores sociales y las políticas de ajuste.
- *Alarcón, W., SOCIALISMO Y PARTICIPACION. 54 - Sin año de publicación; El regreso del líder, crisis, neoliberalismo y desorden.
- *Grampone, Romeo, EL VELERO EN EL VIENTO. - Lima, Perú, IEP. 1991;
- *Degregori, Iván, ELECCIONES 1990: DEMONIOS Y REDENTORES EN EL NUEVO PERU. - Lima, Perú, IEP. 1991;
- *Tironi, E., REVISTA DE LA CEPAL. 53 - Sin año de publicación;
- *Zermeño, S., REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA. - Sin año de publicación

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad N° 121 Septiembre- Octubre de 1992, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>.